CONSTANCIA SECRETARIAL. A despacho del Juez, las presentes diligencias, remitidas por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, para decidir sobre su admisibilidad, sírvase proveer.

DANIEL ARTURO DÍAZ JOJOA

Secretario

AUTO No. 071

Rechazo de demanda – carencia de competencia
JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO
Cali, Tres (03) de Febrero de dos mil veintidós (2.022).
760013103008-2022-00014-00

1.- El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, procede a remitir el presente proceso argumentando que el numeral 3° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2° de la Ley 712 de 2001 establece que *“la jurisdicción laboral tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con la suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical, sin que se otorgue la competencia para conocer de la nulidad de la inscripción de las actas de las juntas directivas de organizaciones sindicales”* y, adicionalmente sustenta su argumento en el Auto fechado 5 de diciembre de 2014, proferido dentro del proceso con radicación 66001- 31-05-001-2014-00077-01, del Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Pereira - Sala Laboral, M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón.

Concluye entonces que *“no es la jurisdicción ordinaria laboral la competente para conocer el presente asunto, conforme lo establecido en el artículo 2° del Código Sustantivo del Trabajo; de manera que, en aplicación del artículo 20 del Código General del Proceso, es a la jurisdicción civil a quien le corresponde conocer de todos los asuntos que no esté atribuidos por ley a otro juez”* y, en consecuencia ordena remitir el proceso a los juzgados civiles del circuito de esta municipalidad.

2.- Así las cosas, asignada por reparto a esta agencia judicial el proceso en ciernes, se dio paso al trámite pertinente de la mismas; donde estudiados los fundamentos de hecho de cara a las pretensiones solicitadas, diferente exegesis de la planteada por el Juez de conocimiento anterior se permite concluir.

Lo anterior, primeramente, en apego a lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-465 de 2008 mediante la cual se estudió la exequibilidad de los artículos 370 modificado por el artículo 5° de la Ley 584 de 2000 y 371 del Código Sustantivo de Trabajo, en cuya providencia decantó en su motivación lo siguiente:

“Ahora bien, en torno a la norma demandada surgen dos preguntas, relacionadas con el punto de la libertad sindical y de la autonomía de las organizaciones sindicales para darse su propia organización y elegir a sus dirigentes.

La primera pregunta se refiere a si el Ministerio de la Protección Social puede negar el registro de los cambios aprobados por un sindicato en su junta directiva. La Corte considera que no. De acuerdo con el principio de la autonomía sindical es el sindicato el que decide quiénes son sus dirigentes. En realidad, la comunicación al Ministerio equivale al depósito de una información ante él. La administración no puede negarse a inscribir a los miembros de la junta directiva que han sido nombrados con el cumplimiento de los requisitos exigidos. Ello constituiría una injerencia indebida de la administración en la vida interna de las organizaciones sindicales. Si el Ministerio – o el empleador – considera que una persona no puede ocupar un cargo de dirección en un sindicato debe acudir a la justicia laboral para que sea ella la que decida sobre el punto.” (Subrayado y negrillas por el Despacho Judicial).

Y más adelante en la misma sentencia concluye nuevamente:

“Por todo lo anterior, se declarará la constitucionalidad de la norma acusada, pero sujeta a dos condiciones: (i) el Ministerio no puede negar la inscripción de los nuevos directivos sindicales, pues si él o el empleador consideran que hay motivos para denegar el registro deberán acudir a la justicia laboral para que así lo declare, y (ii) la garantía del fuero sindical para los nuevos directivos entra a operar inmediatamente después de que al Ministerio o al empleador le ha sido comunicada la designación. En consecuencia, la norma acusada es exequible en el entendido de que la comunicación al Ministerio acerca de los cambios en la junta directiva de un sindicato cumple exclusivamente funciones de publicidad, y de que el fuero sindical

opera inmediatamente después de la primera comunicación”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En ese entendido, la controversia sobre los actos sindicales cuestionados solo podría a la luz de ese derrotero jurisprudencial, ser conocido bajo el marco del proceso ordinario, por ser un conflicto jurídico derivado indirectamente del contrato de trabajo.

Aunado a lo anterior, en sede de recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral en Acta N° 019 del 8 de junio de 2021, indicó:

“De hecho, esta Sala de la Corte ha considerado, a tono con la Corte Constitucional, que las controversias relacionadas con el registro de las organizaciones sindicales y sus actos jurídicos, deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social. Así lo explicó en la sentencia CSJ STL4581-2014, reiterada en CSJ STL4206-2014 y CSJ STL5428-2014:

[...] Es decir, que la inscripción efectuada por la organización sindical a la que pertenece el actor, se encuentra amparada por una protección de rango constitucional que le otorga efectos inmediatos con el único fin de garantizar el ejercicio del derecho de libertad sindical, por lo cual en los términos expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-465 de 2008, cualquier inconformidad frente al registro de las organizaciones sindicales debe ser reclamado ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social, para que sea el juez del trabajo quien declare la denegación de la inscripción en el registro sindical cuando se configuren las razones para ello.

En efecto las modificaciones que las organizaciones sindicales hagan a sus estatutos y los cambios que realicen en sus juntas directivas son asuntos que conciernen exclusivamente a los sindicatos en ejercicio de la libertad sindical y tienen validez desde el momento en que la propia organización sindical las efectúe. Sin embargo, por vía legislativa y en la medida en que no afecte su núcleo esencial, pueden imponerse limitaciones por parte del legislador que resulten razonables y

proporcionadas a la finalidad perseguida, de acuerdo con los requisitos que establecen los artículos 370 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo para la validez de las modificaciones de los estatutos sindicales y para que surtan efecto los cambios que se hagan en sus juntas directivas, deben entenderse solamente como reglas fijadas por el Estado, como lo son todas las normas procesales, en función de la legalidad, la seguridad y la certeza que estas pueden ofrecer y que juntamente con las sustanciales procuran de la mejor forma posible garantizar el derecho de asociación y la organización sindical. Las referidas disposiciones no intervienen las decisiones que emanan del sindicato, ya sea en relación con sus estatutos o con la junta directiva; es decir, las modificaciones tienen existencia propia desde el momento en que fueron adoptadas conforme a los estatutos de la organización sindical, para el desarrollo de los cambios previamente dispuestos y se requiere el cumplimiento de las formalidades legales establecidas en tales disposiciones; pero en todo caso esas decisiones no pueden provenir de manera arbitraria de la autoridad administrativa, sino que como se señaló deben proferirse por vía judicial”.
(Subrayado y negrillas por este Despacho Judicial).

Bajo los anteriores derroteros jurisprudenciales fuerza colegir que es la especialidad laboral la que debe conocer aquellos asuntos en donde se discuta si una persona por sus calidades de tipo subjetivo, es decir, el cargo que ocupa o su situación frente a la empresa empleadora, v. gr, retirado, puede o no ocupar un cargo de dirección en un sindicato, es decir, el análisis de este tipo de procesos lleva implícito circunstancias relativas al contrato de trabajo, y en virtud a ello se escapa del resorte de la especialidad civil.

Y lo anterior es así porque de la redacción de los hechos la empresa demandante se duele de la imposibilidad e incompatibilidad de algunos miembros de la junta directiva del Sindicato de Funcionarios al Servicio de Emcali EICE ESP porque son empleados de dirección y confianza del empleador y otros están retirados de la empresa, situación ajena al análisis de los jueces civiles por ser asuntos de índole laboral; por tanto, este Despacho dispondrá el rechazo de la demanda al carecer de competencia para conocer el asunto en ciernes, y por lo tanto planteará el conflicto negativo, remitiendo la actuación al Tribunal Superior de Cali Sala Mixta, como

superior jerárquico de ambas sedes judiciales, atendiendo el contenido del Artículo 18 de la Ley 270 de 1996.

En consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

1.-**RECHAZAR** el presente proceso Ordinario, instaurado por EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP contra el SINDICATO DE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE EMCALI EICE ESP por carecer de competencia, tal como quedó plasmado en la parte motiva de esta providencia.

2.-**ENVÍESE** con todos sus anexos ante el Tribunal Superior de Cali Sala Mixta, para que se dirima el conflicto planteado y conforme las razones expuestas.

3.-**CANCÉLESE** su radicación y anótese su salida definitiva.

NOTIFIQUESE

LEONARDO LÉNIS.

JUEZ 1

760013103008-2022-00014-00